

Mayo 8 y 9 de 1947

4ª REUNION — 3ª SESION ORDINARIA

Presidencia de los doctores Ricardo C. Guardo, Joaquín Díaz de Vivar
y John William Cooke

Secretarios: doctores Leonidas Zavalla Carbó y Rafael V. González

Prosecretario: señor Eduardo Sánchez Terrero

MINISTRO PRESENTE:

de Guerra,

General de brigada José Humberto Sosa Molina

DIPUTADOS PRESENTES:

Albrieu, Oscar E.
Alvarez, Juan Daniel
Alvarez, Néstor
Alvarez Pereyra, Manuel
Alvarez Pérez, Vicente
Alvarez Vocos, Enrique
Allub, Rosendo
Andreotti, Antonio
Aráoz, Ricardo E.
Arévalo Cabeza, Jabel
Argaña, José M.
Arias, José
Ayala López Torres, Francisco
Bagnasco, Vicente
Balbin, Ricardo
Barreiro, Carmelo
Baulina, Angel V.
Benítez, Antonio J.
Beretta, Eduardo
Bertini, Amadeo
Bonazzola, Romeo E.
Boullosa, Emilio M.
Braga, Juan Carlos
Brugnerotto, Juan N. D.
Busaniche, Julio J.
Bustos Fierro, Raúl
Cámara, Guillermo F.
Cámpora, Héctor J.
Candiotti, Alberto M.
Cleve, Ernesto
Colom, Eduardo
Cooke, John William
Córdova, J. Salvador
Corvalán, Luciano R.

Cufre, Orlando H.
Cuminetti Correa, Alcides D.
Decker, Rodolfo A.
Degreef, Juan Ramón
De la Torre, Juan
Del Carril, Emilio Donato
Del Mazo, Gabriel
Delleplane, Luis
Díaz Colodrero, Justo
Díaz de Vivar, Joaquín
Dri, Roberto
Dufau, Juan Adolfo
Errecart, Juan A.
Fajre, José Benito
Fernández, Baltasar S.
Fernández, Hernán S.
Ferrando, Manuel P.
Ferrer, Modesto
Fregossi, Luis J.
Fronzizi, Arturo
Galvagni, Saverio M.
Garaguso, Bernardino Hipólito
Garay, Marcelino S.
García, Manuel
García Quiroga, Alejandro
Guardo, Ricardo C.
Guillot, César Joaquín
Kees, Gaspar
Klix López, Guillermo
Lareo, Ricardo
Lencinas, José R.
Letamendi, Balbino (h.)
Liceaga, Félix J.
López Serrot, Oscar
Mac Kay, Luis R.
Malecek, José Enrique
Mántaras, Manuel J.
Marotta, José
Martínez Guerrero, Guillermo
Mendiando, F. Daniel
Messina, Humberto
Montiel, Alcides E.

Mosset Iturraspe, Mario
Mujica, Rodolfo
Noriega, Juan J.
Obeld, Leonardo
Orozco, Modesto V.
Osinalde, Rafael
Ottonello, Benito J.
Pasquini, José P. D.
Pastor, Reynaldo A.
Peña Guzmán, Solano
Perea, Pedro J.
Pérez de la Torre, Horacio
Petruzzi, Miguel
Pirani, Antonio S.
Pollzi, Juan
Pomar, Gregorio
Ponce, Angel L.
Pueyrredón, Horacio Honorio
Raña, Eduardo Antonio
Ravignani, Emilio
Repetto, Agustín
Reyes, Cipriano
Reynés, Leandro R.
Ricagno, Roberto
Rodríguez de la Torre, Raúl
Rodríguez, Manuel
Rodríguez, Nerio M.
Rojas, Absalón
Rojas, Nerio
Rossi, José
Rougier, Valerio S.
Rubino, Sidney Nicolás
Rumbo, Eduardo I.
San Millán, Ricardo Antonio
Saravia, Teodoro S.
Sarmiento, Manuel
Sarraute, José Roberto
Sobral, Antonio
Solana, Emilio
Sustaita Seeber, Héctor
Tejada, Ramón Washington
Tesorieri, José V.

Tommasi, Victorio M.
Toro, Ricardo
Uranga, Raúl L.
Urdapilleta, Oscar C.
Vanasco, Julio A.
Velloso Colombres, Manuel F.
Villafañe, José María
Visca, José Emilio
Vischi, Albino
Zanoni, Pedro P.
Zara, Edmundo Leopoldo
Zinny, Mario

AUSENTES, CON LICENCIA:

Antille, Diógenes C.
Camus, Eloy P.
Casal, Raúl M.
Casas Noblega, Armando
Churchod, Amado J.
Díaz, Manuel M.
Gericke, Carlos Gustavo,
Jofré, Hernán R.
Laselar, Guillermo F.
Maineri, D. Jacinto
Martínez Luque, Enrique
Pontieri, Silverio
Santander, Silvano
Valdez, Celestino

AUSENTES, CON AVISO:

Ayerbe, Lázaro Balbino
Calcagno, Alfredo D.
Giménez Vargas, Francisco
González Funés, Tomás
Graña Etcheverry, Manuel
Mariategui, Angel S.
Montes de Oca, Carlos
Moreno, José Luis
Palacio, Ernesto
Sammartino, Ernesto E.
Vergara, Amanda

SUMARIO

- 1.—Manifestaciones en minoría.
- 2.—Versiones taquigráficas.
- 3.—Asuntos entrados (1):

(1) Véase el número 29 (II) de este sumario.

- I.—Mensaje del Poder Ejecutivo sobre prórroga del plazo de validez de los compromisos relacionados con la constitución de la Sociedad Mixta Siderurgia Argentina.
- II.—Comunicaciones del Honorable Senado.
- III.—Despachos de comisión.
- IV.—Peticiones particulares.

- 10.—Moción del señor diputado Sarmiento, de preferencia para el proyecto de ley sobre seguro colectivo obligatorio para el personal de la administración nacional.
- 11.—Indicaciones del señor diputado Rubino sobre orden de labor de la Honorable Cámara; moción de preferencia para el proyecto de ley sobre modificaciones a la ley 10.650, de jubilaciones y pensiones ferroviarias. Se aprueba.
- 12.—Moviones del señor diputado Argaña, de preferencia para los proyectos de ley que reglamentan la profesión de despachante de aduana y el notariado. Se aprueban.
- 13.—Manifestaciones del señor diputado Visca con respecto a una adhesión al proyecto de ley sobre instalación de una planta industrializadora de maíz en Pergamino.
- 14.—Consideración del despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley, en revisión sobre crédito extraordinario a la Imprenta del Congreso. Se sanciona.
- 15.—Consideración del despacho de la Comisión de Asistencia y Previsión Social en el proyecto de ley, en revisión, sobre modificaciones a la ley 10.650, de jubilaciones y pensiones ferroviarias. Se sanciona.
- 16.—Moción del señor diputado Cooke sobre orden de labor de la Honorable Cámara.
- 17.—La Honorable Cámara, constituida en comisión, considera el proyecto de ley en revisión, por el que se concede permiso al presidente de la Nación para ausentarse temporariamente del país.
- 18.—Aprobación del despacho de la Honorable Cámara, en comisión, a que se refiere el número 17 de este sumario.
- 19.—Moción del señor diputado Cooke, de preferencia para la consideración del proyecto de ley sobre ratificación de los decretos leyes correspondientes al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública.
- 20.—Continúa la consideración del despacho de la Comisión Especial Revisora de Decretos Leyes en el proyecto de ley, en revisión, a que se refiere el número 19 de este sumario. Se sanciona.
- 21.—Moción del señor diputado Cooke, de continuar la sesión hasta terminar la consideración del proyecto de ley sobre plan siderúrgico. Se aprueba.

- 22.—Moción del señor diputado Albrieu, de que la Cámara se constituya en comisión para considerar la suspensión de las sesiones. Se aprueba.
- 23.—La Honorable Cámara, constituida en comisión, considera la comunicación del Honorable Senado sobre suspensión de las sesiones hasta el día 30 de mayo.
- 24.—Aprobación del despacho producido por la Cámara, en comisión, en el asunto a que se refiere el número 23 de este sumario.
- 25.—Consideración del despacho de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Legislación General, Industrias y Comercio y Defensa Nacional en el proyecto de ley, en revisión, sobre plan siderúrgico. Se sanciona.
- 26.—Moción del señor diputado Albrieu sobre trámite de asuntos entrados.
- 27.—Cuestión de privilegio planteada por el señor diputado Visca a propósito de los términos contenidos en una comunicación leída en los debates de la Honorable Cámara.
- 28.—Consideración del despacho de la Comisión de Asistencia y Previsión Social en el proyecto de ley, en revisión, sobre retiros y pensiones para el personal del servicio penitenciario.
- 29.—Apéndice:
- I.—Sanciones de la Honorable Cámara.
- II.—Asuntos entrados cuyo trámite ha sido dispuesto por la Presidencia, en cumplimiento de la resolución de la Honorable Cámara (1):
- * I.—Comunicaciones del Honorable Senado.
- II.—Despachos de comisión.
- III.—Peticiones particulares.
- IV.—Proyecto de ley del señor diputado Obeld: crédito extraordinario para pago de diferencias de sueldos a personal docente y administrativo dependiente del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública.
- V.—Proyecto de ley del señor diputado Zinny y otros: creación del Instituto Nacional de la Brucelosis.
- VI.—Proyecto de ley del señor diputado Rojas (N.) y otros: aplicación de la ley 11.729, sobre indemnización por despido y preaviso al personal de empresas privadas o mixtas.

(1) Véase la página 75 de esta edición del Diario de Sesiones.

Sr. Presidente (Guardo). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Visca. — Para hacer esta indicación he tomado la tesis sostenida en la sesión de ayer por el señor diputado Mántaras.

Voy a leer el párrafo que considero lesivo de la dignidad de este cuerpo y del Honorable Senado de la Nación, después de lo cual creo que ningún señor diputado dudará de que se trata de una cuestión de privilegio.

Dice así: «La soberanía avasallada por los documentos de Chapultepec y San Francisco, con el consentimiento de la mayoría parlamentaria, en una claudicación afrentosa, experimenta con la nueva sanción el dolor de una profunda herida. Se ha entregado a los intereses de consorcios internacionales opresores el destino de nuestro país en su industria básica... y el señor ministro de Guerra compromete aún la gratitud del ejército! ¡Cómo, señor presidente, puede, decirse en una afirmación temeraria que se está asegurando la soberanía, mientras se aprueba un contrato que la enajena!»

Entiendo que estas palabras deben pasar a comisión.

Sr. Colom. — Que se vote.

Sr. Reyes. — Quiero aclarar una cuestión.

El único diputado que da estado parlamentario a esta declaración es el señor Visca, porque yo no he leído tal cosa a la Honorable Cámara.

Sr. Visca. — No llegó hasta allí.

La carta fué asegurada como auténtica, y estas cuestiones no se discuten.

Sr. Mac Kay. — Que pasen a comisión las palabras del señor diputado Visca.

Sr. Reyes. — Lo único que tiene que pasar a comisión son las palabras pronunciadas por el señor diputado Visca.

Sr. Presidente (Guardo). — Se va a votar la moción del señor diputado Visca, ampliada por el señor diputado Frondizi.

Sr. Ravignani. — ¿Que pase a la comisión qué?

Sr. Colom. — La cuestión de privilegio.

Sr. Cooke. — La Comisión de Asuntos Constitucionales no puede afrontar la responsabilidad de tener que rendir cuenta a la Cámara de una investigación que no está en condiciones técnicas de realizar.

Sr. Ravignani. — Deseo saber qué es lo que el señor diputado Visca quiere que pase a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Sr. Visca. — La carta donde está el agravio al Parlamento.

Sr. Ravignani. — Entiendo que lo que puede hacer la Comisión de Asuntos Constitucionales es aconsejar a la Cámara sobre la cuestión de privilegio...

Sr. Visca. — Eso lo resolverá la comisión.

Sr. Ravignani. — ...y sobre si cabe o no la investigación.

Sr. Colom. — Está perfectamente claro, señor profesor.

Sr. Ravignani. — Muy bien, señor periodista.

Sr. Frondizi. — Ese es el alcance que debe darse a la proposición que formulé.

Sr. Visca. — Pido que pase a comisión el texto que está en esta carta. Me extraña que los profesores de derecho...

Sr. Frondizi. — No soy profesor, ni quiero serlo. Se lo he explicado en una sesión anterior.

Sr. Visca. — Me refiero al señor diputado Ravignani.

Sr. Presidente (Guardo). — El señor diputado Ravignani ha aclarado el alcance de la moción del señor diputado Frondizi.

Sr. Visca. — Retiro lo de profesor.

Sr. Ravignani. — No he oído al señor diputado Visca, pero creo que ha personalizado conmigo...

Varios señores diputados. — Ya retiró las palabras pronunciadas.

Sr. Presidente (Guardo). — Se va a votar la moción del señor diputado Visca, con el alcance que resulta de las aclaraciones hechas.

— Resulta afirmativa de 63 votos; votan 82 señores diputados.

— Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, doctor John William Cooke.

28

RETIROS Y PENSIONES DEL SERVICIO PENITENCIARIO

(Orden del día número 290)

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Asistencia y Previsión Social ha estudiado el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado, por el que se establece un régimen de retiros y pensiones para el personal del Servicio Penitenciario de la Nación; y, por las razones que se expresan en el informe adjunto, os aconseja la sanción del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — El personal del Servicio Penitenciario de la Nación, comprendido en la ley 11.833, gozará del régimen de retiros y pensiones que se establece por la presente ley.

Art. 2º — El retiro a que se refiere el artículo anterior será obligatorio o voluntario.

Art. 3º — Pasará obligatoriamente a situación de retiro el personal que se encuentre en alguna de las situaciones que se expresan a continuación:

- a) Haber alcanzado el límite de edad;
- b) Haber sido declarado inepto para continuar en el ejercicio de su empleo.

Art. 4º — Establécense como límites de edad, al efecto del inciso a) del artículo 3º, los siguientes:

PLANA SUPERIOR

| Grados | Límite de edad |
|-------------------------------|----------------|
| Director general | 60 años |
| Subdirector general | 60 " |
| Inspector general | 58 " |
| Prefecto mayor | 56 " |
| Prefecto | 54 " |
| Subprefecto | 54 " |
| Alcaide mayor | 52 " |
| Alcaide | 50 " |
| Subalcaide | 50 " |
| Adjutor principal | 50 " |
| Adjutor | 50 " |
| Subajutor | 50 " |

PLANA INFERIOR

| Grados | Límite de edad |
|------------------------------|----------------|
| Sargento principal | 50 años |
| Sargento ayudante | 50 " |
| Sargento celador | 50 " |
| Cabó guardián | 50 " |
| Guardia | 50 " |
| Guardia ayudante | 45 " |

Art. 5º — El derecho al haber de retiro existe:

En el retiro obligatorio

- a) Cuando se computen quince años de servicios;
- b) En caso de inutilización en o por actos del servicio, cualquiera sea el tiempo computado;
- c) En caso de inutilización fuera de actos del servicio, cuando se computen diez años como mínimo y con sujeción a lo dispuesto en el artículo 10. Cuando no se computen diez años, sólo se otorgará una indemnización de dos meses de sueldo por cada año de servicios, conforme al artículo 9º;

En el retiro voluntario

- d) Cuando se computen diecisiete años de servicios.

Art. 6º — Cuando el retiro obligatorio sea dado sin que el afiliado pueda computar el tiempo de servicios establecido en el artículo 5º, inciso a), tendrá derecho a la devolución de una suma igual al monto de los aportes efectuados con el interés del 3 % capitalizado cada año. Se pierde este derecho cuando el causante hubiere sido separado del servicio por violación de los deberes de su cargo, mediante exoneración dictada previo sumario en forma.

Art. 7º — Los servicios prestados en la administración nacional, con excepción del servicio militar obligatorio, se computarán a los efectos del retiro sólo cuando el causante tenga quince años de antigüedad en el Servicio Penitenciario de la Nación. Exceptuase el personal ingresado con anterioridad a la promulgación de la presente, que solamente deberá acreditar cinco años de servicios en la repartición.

El cómputo de los servicios comunes y privilegiados se efectuará de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

Art. 8º — A los efectos del cómputo del tiempo de servicios la fracción de año que pasare de seis meses se considerará como un año entero, siempre que el causante tuviere el tiempo mínimo para tener derecho a retiro o fuere pasado a esta situación.

Art. 9º — Cualquiera sea la situación de revista que tuviere el personal en el momento de su pase a retiro, se computará a los efectos de determinar su haber de retiro, el importe del último sueldo. Entiéndese por sueldo, la asignación mensual fijada por presupuesto, más los suplementos, bonificaciones, etcétera, de cualquier naturaleza, por las que se le efectúen descuentos jubilatorios.

Art. 10. — El haber de retiro será proporcional al tiempo de servicios computados y se graduará sobre el monto calculado según el artículo 9º, de acuerdo con la siguiente escala:

| Años de servicios | Plana superior | Plana inferior |
|-------------------|----------------|----------------|
| 10 | 30 % | 30 % |
| 11 | 34 " | 34 " |
| 12 | 38 " | 38 " |
| 13 | 42 " | 42 " |
| 14 | 46 " | 46 " |
| 15 | 50 " | 50 " |
| 16 | 53 " | 55 " |
| 17 | 56 " | 60 " |
| 18 | 59 " | 65 " |
| 19 | 62 " | 70 " |
| 20 | 65 " | 75 " |
| 21 | 69 " | 80 " |

| Años de servicios | Plana superior | Plana inferior |
|-------------------|----------------|----------------|
| 22 | 73 .. | 85 .. |
| 23 | 77 .. | 90 .. |
| 24 | 81 .. | 95 .. |
| 25 | 85 .. | 100 .. |
| 26 | 88 .. | |
| 27 | 91 .. | |
| 28 | 94 .. | |
| 29 | 97 .. | |
| 30 | 100 .. | |

Art. 11. — En el caso del artículo 59, inciso b), el haber de retiro se calculará sobre el sueldo:

- a) Incapacidad absoluta, el 100 %;
- b) Incapacidad parcial, de acuerdo con la siguiente escala y siempre que por aplicación del artículo 10 no le correspondiera una asignación mayor:

| | |
|---|-------|
| Pérdida de un pie, una pierna, un brazo o una mano | 100 % |
| Pérdida del índice o pulgar derechos | 50 .. |
| Pérdida de otro dedo mano derecha | 40 .. |
| Pérdida de otro dedo mano izquierda | 30 .. |
| Pérdida del dedo mayor de un pie | 45 .. |
| Pérdida de otro dedo de un pie | 30 .. |
| Pérdida de la vista de un ojo | 80 .. |
| Pérdida total del oído | 85 .. |
| Pérdida parcial del oído | 30 .. |
| Toda lesión orgánica o funcional que incapacite para el desempeño de su empleo, pero que no impida otro género de trabajo | 45 .. |

A los efectos de la aplicación de la escala precedente, se considerará pérdida de un miembro u órgano la disminución de un 60 % de su capacidad.

Art. 12. — En los casos que proceda la aplicación del artículo 11 a los cadetes, se considerará sobre el sueldo correspondiente para el grado de subadjutor.

Art. 13. — En los casos en que, con arreglo a las disposiciones de la presente ley, haya derecho a retiro y ocurra el fallecimiento del afiliado, tendrán derecho a pensión:

- a) La viuda o viudo incapacitado o septuagenario, en concurrencia con los hijos del causante;
- b) Los hijos del causante solamente;
- c) La viuda en concurrencia con los padres, siempre que éstos hubiesen estado a cargo del causante;
- d) La viuda o viudo incapacitado o septuagenario;
- e) Los padres en las condiciones del inciso c);
- f) Las hermanas del causante menores de edad o incapacitadas de cualquier edad

que a la fecha del fallecimiento del causante —en situación de actividad o retiro— estén a cargo de aquél.

Art. 14. — La pensión se dividirá entre la viuda o el viudo incapacitado o septuagenario, descendientes, ascendientes o hermanos, conforme a las reglas establecidas por el Código Civil para la división de la herencia y como si se tratara de un bien ganancial; entre los hijos del causante, la división se hará por partes iguales.

Art. 15. — La pensión se liquidará desde la fecha del fallecimiento del causante; es personal y vitalicia; inenajenable e inembargable. Todo acto contrario a esta disposición es nulo.

Art. 16. — No tendrán derecho a pensión el cónyuge o la cónyuge que quedaren viudos hallándose divorciados por su culpa o por culpa de ambos. Igual ocurrirá si mediare separación de hecho sin voluntad de unirse, si la separación fuese imputable al viudo o viuda.

Art. 17. — La pensión se extingue:

- a) Para la viuda, viudo, padre o madre, con derecho a pensión, el día que contrajere nuevas nupcias;
- b) Para los hijos varones el día que cumplan 18 años de edad, salvo que se encontrasen incapacitados para el trabajo;
- c) Para las hijas solteras el día que contrajeran matrimonio;
- d) Para las hermanas solteras desde que cumplieren 22 años —salvo que se hallaren incapacitadas— o desde que contrajeran matrimonio;
- e) Para los derechohabientes que se domiciliaren en el extranjero, sin permiso del Poder Ejecutivo;
- f) Por vida deshonesto, vagancia, vida marital de hecho o por haber sido condenado por delito contra la propiedad y en los casos y límites previstos en los artículos 12 y 19 del Código Penal;
- g) Por condena del derechohabiente a la pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o a la pérdida de derechos de ejercicio de la ciudadanía argentina.

Art. 18. — Cuando se extinga el derecho de alguno de los copartícipes de pensión, la parte del mismo acrecerá proporcionalmente la de los demás.

Art. 19. — En el caso de ausencia del causante con presunción de fallecimiento, se otorgará a los derechohabientes pensión provisional y hasta tanto aquélla se declare judicialmente, en cuyo caso se convertirá en permanente.

Art. 20. — La pensión se acordará de conformidad con las siguientes disposiciones:

- a) A los derechohabientes del personal en situación de retiro o fallecido en actividad, el importe de la pensión será del 65 % del haber de retiro que gozaba o a que tenía derecho el causante al día de su muerte, cuando su monto no excediera de doscientos pesos moneda nacional. En el caso que fuese mayor de esta cantidad, la pensión será del 65 % sobre los primeros doscientos pesos moneda nacional, y del 50 % sobre el excedente;
- b) Los derechohabientes del personal en situación de actividad que fallezca en o por actos del servicio, gozarán de pensión mensual equivalente a las dos terceras partes del sueldo que percibía el causante al día de su muerte;
- c) Sobre el haber de la pensión, así determinado, se efectuará una bonificación del 5 % del mismo por cada copartípe que exceda de tres. La bonificación cesará parcial o totalmente al desaparecer sus fundamentos.

El monto de la pensión global no podrá ser, en ningún caso, inferior a cien pesos moneda nacional ni superior a la mitad del sueldo correspondiente al grado máximo de la escala jerárquica.

Art. 21. — El personal comprendido en esta ley continuará contribuyendo al Instituto Nacional de Previsión Social con los aportes establecidos hasta el presente.

Art. 22. — El Poder Ejecutivo depositará mensualmente en el Banco de la Nación Argentina y a la orden del Instituto Nacional de Previsión Social (sección de la ley 4.349) la diferencia entre el monto de los retiros y pensiones acordados de acuerdo con la presente, y el monto que hubiere correspondido conforme a la ley vigente, en el momento en que ellos sean otorgados.

Art. 23. — El retiro obligatorio por límite de edad no se aplicará al personal que reviste en la repartición con anterioridad a la promulgación de la presente ley, mientras no compute 25 y 22 años de servicios, el comprendido en las planas superior e inferior, respectivamente.

Art. 24. — El personal que actualmente tenga la edad límite fijada para cada grado por el artículo 49 y compute 25 años de servicios en la administración nacional, si tiene 5 años de antigüedad en la repartición y pertenece a la misma, pasará a disponibilidad y deberá acogerse de inmediato al retiro con el haber correspondiente al último sueldo.

El Poder Ejecutivo, por disposición expresa, podrá eximir de la obligación que antecede al

personal que conceptúe indispensable mantener en servicio.

Art. 25. — El gasto que demande el cumplimiento de la presente se hará de rentas generales, con imputación a la misma, hasta tanto se incorpore al presupuesto general de la Nación.

Art. 26. — Deróganse todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.

Art. 27. — Comuníquese al Poder Ejecutivo. Sala de la comisión, 10 de abril de 1947.

Benito J. Ottonello. — Modesto V. Orozco. — Ricardo E. Aráoz. — Rafael Osinalde. — Manuel Rodríguez. — Mario Zinny.

INFORME

Con fecha 19 de febrero tuvo entrada en el Honorable Senado de la Nación un mensaje del Poder Ejecutivo y proyecto de ley adjunto, estableciendo un régimen de retiros y pensiones para el personal del servicio penitenciario de la Nación. El 20 de marzo el Honorable Senado prestó aprobación al citado proyecto, introduciendo algunas modificaciones.

Esta comisión ha revisado la sanción del alto cuerpo, ajustando el texto legal que informo a los despachos y sanciones de esta Cámara, en materia de previsión social. Y, por su notoria semejanza, ha seguido los lineamientos impresos en el régimen recientemente sancionado de retiros y pensiones para el personal de la Prefectura General Marítima, con ligeras enmiendas, como consecuencia de particulares características relativas al personal penitenciario de la Nación.

El régimen especial proyectado se justifica en razón de un doble fundamento: riesgo y labor continuada y permanente, en el ejercicio de la importante misión de defensa social, cumplida por este personal.

Universalmente se ha sustentado la doctrina de que el personal de policía, y por analogía el de cárceles, está permanentemente en funciones. En efecto, si se trata del personal superior, sus servicios son permanentes y continuados, no sujetos a diagrama alguno de relevo, en base a expresas disposiciones reglamentarias y si consideramos al personal subalterno, tenemos que aun hallándose franco no puede ausentarse del lugar, asiento de sus funciones, sin conocimiento y autorización superior, por si sus servicios debieran ser requeridos en cualquier momento.

Estas razones, y otras que explicaré, no consienten la equiparación de estos servicios con otros de la administración civil.

Al discutirse en este mismo recinto, en el año 1942, el régimen jubilatorio para el personal carcelario, se exhibió la naturaleza de las funciones desempeñadas. Señalóse que, en todas partes del mundo, estos servidores cuentan con una ley especial o con cláusulas de excepción en las respectivas leyes de previsión. Así, Francia e Inglaterra, consideran que este empleado, al prestar 25 años de servicios, ha ganado el derecho a retiro, con el concepto de que el Estado no consulta solamente la equidad compensatoria de tales servicios, sino tiene en cuenta, también, el interés social, que reclama condiciones físicas e intelectuales adecuadas para el desempeño de la función específica.

En nuestro país, una alta autoridad científica, el doctor Nicolás Matienzo, expresaba: «En las penitenciarías y cárceles puede decirse que no hay empleados que no se hallen constantemente expuestos al peligro y a quien, directa o indirectamente, no corresponda un deber de vigilancia; y, a mi juicio, esta contracción constante a tal deber y ese peligro continuo es lo que la ley premia.»

En las cárceles, el personal superior o subalterno convive la mitad de su existencia con el hombre excluido del medio social por su inadaptabilidad y con todos aquellos que por razón de su peligrosidad, o de enfermedad física o mental (bacilosos, leprosos, específicos, neurópatas, alienados, etcétera) requieren permanente y cuidadosa dedicación. De ahí, que el personal está expuesto en forma permanente, no sólo por la temibilidad, perversidad o enfermedad de los reclusos, sino también por la reiterada comisión de actos de irresponsables, en cualquier instante de la diaria actividad.

En consecuencia, la labor horaria del personal penitenciario, las particularidades de la función, la naturaleza de los servicios (especialidad funcional y jerárquica de los cargos, con responsabilidad jurídica), orden disciplinario estricto, frecuencia, asiduidad y puntualidad, el medio en que deben desarrollarse las tareas y, por último, hasta el lugar mismo de destino en el que se presta servicio, justifican ampliamente el establecimiento de un régimen especial de retiros y pensiones.

Un cálculo realizado, de carácter comparativo, demuestra que, con relación a los empleados de la administración nacional, el personal penitenciario lleva a cabo una labor equivalente a casi 15 años más de jornada-servicio y, con respecto a los obreros en general, dicho estudio señala más de 4 años de jornada-servicio en favor del personal carcelario.

En cuanto al régimen de licencias, debe destacarse que se opera un fenómeno inverso, esto es, para el personal penitenciario se remarca una evidente desventaja en este beneficio, al término de la carrera.

En lo que concierne al examen circunstanciado de las disposiciones, sólo he de comentar aquellas que se refieren especialmente a la repartición a la que habrá de aplicarse la legislación en proyecto. Las restantes han sido debidamente analizadas al informar un proyecto análogo para la Prefectura General Marítima.

Así, entonces, el artículo 7º establece, como principio, la necesidad de una permanencia de 15 años en el servicio penitenciario de la Nación, para poder computar otros servicios a los efectos del retiro. La excepción la constituye el personal que presta actualmente servicios, al que sólo se le exige 5 años de antigüedad en la dependencia. Se ha tenido en cuenta, para proyectarlo, el hecho de que la Dirección General de Institutos Penales ha sido creada en el año 1933 en virtud de la ley 11.833, y que, de entonces a la fecha, no ha transcurrido el espacio de 15 años establecido para reparticiones que cuentan con servicios estructurados definitivamente desde hace muchos años. Por otra parte, es de público conocimiento que los servicios escalafonados y con disposiciones que regulan el ingreso y derecho a la carrera penitenciaria datan de poco tiempo, por lo que ha sido menester, para obrar con justicia, respetar situaciones de hecho no imputables al propio personal.

Las disposiciones de los artículos 23 y 24 del proyecto, son de carácter transitorio. Facilitan la per-

manencia del personal ya ingresado a la repartición y además, con la apertura del escalafón por el retiro de los que han llegado a la edad límite fijada para cada uno de los grados si cuentan con 25 años de servicios, se satisfacen las respetables aspiraciones del personal antiguo y, correlativamente, los legítimos derechos de los empleados que se sienten con aptitudes para aspirar a cargos de mayor jerarquía.

Este régimen que, como queda dicho, es similar al sancionado por la Honorable Cámara para el personal de la Prefectura General Marítima y semejante al establecido para la Policía Federal y Gendarmería Nacional, deberá —a breve plazo— uniformarse en un solo cuerpo legal, dotando al numeroso personal en él comprendido de un instrumento normativo que lo ampare por igual, en razón de la común naturaleza específica de su actividad.

Manuel Rodríguez.

Buenos Aires, 20 de marzo de 1947.

Señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Tengo el honor de comunicar al señor presidente que el Honorable Senado, en sesión de la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en revisión a esa Honorable Cámara:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Establécese para el personal del servicio penitenciario de la Nación, comprendido en la ley 11.833, el régimen de retiros y pensiones que se articula a continuación.

Art. 2º — El retiro puede ser voluntario u obligatorio.

Art. 3º — Pasará obligatoriamente a situación de retiro el personal del servicio penitenciario de la Nación a quien comprenda alguna de las situaciones que se expresan a continuación:

- Por haber alcanzado el límite de edad;
- Por haber sido declarado físicamente inhabilitado para continuar en el ejercicio de su empleo;
- Por haber sido declarado intelectualmente incapacitado para desempeñar su empleo u otro;
- Por haberlo así aconsejado la Junta de Calificación, en los casos previstos en el estatuto del servicio penitenciario de la Nación.

Art. 4º — El personal que deba pasar obligatoriamente a retiro y no tenga derecho a pensión, será declarado cesante o dado de baja, según sea el caso.

Art. 5º — Establécese como límite de edad, a los efectos del inciso a) del artículo 3º, los siguientes:

PLANA SUPERIOR

| Grados | Límite de edad |
|-------------------------------|----------------|
| Director general | 60 años |
| Subdirector general | 60 .. |
| Inspector general | 58 .. |
| Prefecto mayor | 56 .. |

| Grados | Límite de edad |
|-----------------------------|----------------|
| Prefecto | 54 años |
| Subprefecto | 54 " |
| Alcaide mayor | 52 " |
| Alcaide | 50 " |
| Subalcaide | 50 " |
| Adjutor principal | 47 " |
| Adjutor | 45 " |
| Subadjutor | 45 " |

PLANA INFERIOR

| | |
|--------------------------------|---------|
| Suboficial principal | 50 años |
| Sargento ayudante | 50 " |
| Sargento celador | 50 " |
| Cabo guardián | 50 " |
| Guardia | 50 " |
| Guardia ayudante | 45 " |

Art. 6º — El derecho al sueldo de retiro existe:

- En el retiro voluntario, para el personal de la plana superior, cuando haya computado veinte años de servicios; si es de la plana inferior, cuando tenga diecisiete años;
- En el retiro obligatorio, cuando el causante acredite quince años de servicios computables;
- En el caso de inutilización permanente para el ejercicio del cargo sobreviniente por enfermedad o accidente ocurrido en actos del servicio o a consecuencia del mismo, cualquiera sea el tiempo computado;
- El personal que quedare inutilizado fuera de actos del servicio (enfermedades no imputables a la función o accidentes) que compute diez o más años de servicios se le aplicará la escala, a los efectos de su haber, establecida por el artículo 9º.

Si no tuviere computado diez años de servicios, será dado de baja o declarado cesante, otorgándosele una indemnización de un mes de sueldo, promedio calculado de acuerdo con lo prescrito en el artículo 8º, por cada año de servicio.

Art. 7º — Los servicios prestados bajo otros regímenes jubilatorios, con excepción del servicio militar obligatorio y los privilegiados, comprendidos en la ley 12.601 —que se considerarán prestados en el cuerpo—, se computarán a los efectos del retiro sólo cuando el causante tenga una antigüedad de diez años en la institución al 15 de marzo de 1957, requiriéndose en adelante quince años.

Art. 8º — Cualquiera sea la situación de revista que tuviere el personal en el momento de su pase a retiro, el sueldo se calculará:

- Plana superior: Sobre el promedio de los sueldos mensuales fijados en el presupuesto para los últimos dos años y las sumas asignadas en concepto de prestación de casa habitación o en su defecto el valor locativo subsidiario, incluyéndose también todo otro emolumento por el cual deba efectuar aportes jubilatorios;
- Plana inferior: Sobre el promedio mensual de la remuneración fijada en el presupuesto para los últimos dos años de permanencia en la institución, incluidos los suplementos por

racionamiento y las bonificaciones por concepto de antigüedad y por servicios de zona, establecidos o que pudieran establecerse.

Art. 9º — El sueldo de retiro será proporcional al tiempo de servicio computado, y se graduará sobre el monto calculado según el artículo 8º, de acuerdo con la siguiente escala:

| Años de servicio | Plana superior | Plana inferior |
|------------------|----------------|----------------|
| 10 | 30 % | 25 % |
| 11 | 34 " | 30 " |
| 12 | 38 " | 35 " |
| 13 | 42 " | 40 " |
| 14 | 46 " | 45 " |
| 15 | 50 " | 50 " |
| 16 | 53 " | 55 " |
| 17 | 56 " | 60 " |
| 18 | 59 " | 65 " |
| 19 | 62 " | 70 " |
| 20 | 65 " | 75 " |
| 21 | 69 " | 80 " |
| 22 | 73 " | 85 " |
| 23 | 77 " | 90 " |
| 24 | 81 " | 95 " |
| 25 | 85 " | 100 " |
| 26 | 88 " | — |
| 27 | 91 " | — |
| 28 | 94 " | — |
| 29 | 97 " | — |
| 30 | 100 " | — |

Art. 10. — En el caso del artículo 6º, inciso c), el sueldo de retiro se calculará:

- Por incapacidad absoluta y permanente —entendida como la que impide todo género de trabajo en la vida social— el 100 % del último sueldo;
- Por incapacidad parcial y permanente, y siempre que por aplicación del artículo 9º no le correspondiera una asignación mayor, el haber de retiro se calculará sobre el último sueldo de acuerdo con la siguiente escala:

| | |
|---|-------|
| Por pérdida de un pie, una pierna, un brazo o una mano | 100 % |
| Por pérdida del índice o pulgar derecho | 50 " |
| Por pérdida de otro dedo, mano derecha | 40 " |
| Por pérdida de otro dedo, mano izquierda | 30 " |
| Por pérdida del dedo mayor de un pie | 45 " |
| Por pérdida de otro dedo de un pie | 30 " |
| Por pérdida de la vista de un ojo | 80 " |
| Por pérdida total del oído | 85 " |
| Por pérdida parcial del oído | 30 " |
| Por toda lesión orgánica o funcional que incapacite para el desempeño de su empleo, pero que no impida otro género de trabajo | 45 " |

A los efectos de la aplicación de la escala precedente se considerará pérdida de un miembro u órgano, la disminución de un 60 % de su capacidad.

Art. 11. — Los deudos del personal del servicio penitenciario con derecho a pensión, son los siguientes:

- a) La viuda;
- b) El viudo incapacitado o septuagenario;
- c) Los hijos varones legítimos o naturales reconocidos o declarados tales por sentencia judicial, hasta los 18 años de edad, y los mayores incapacitados para el trabajo;
- d) Las hijas solteras legítimas o naturales reconocidas o declaradas tales por sentencia judicial;
- e) La madre viuda o el padre septuagenario o impedido, siempre que estuvieren sostenidos por el causante hasta el momento del fallecimiento del mismo;
- f) Las hermanas del causante menores de edad o incapacitadas de cualquier edad y a cargo de aquél.

Art. 12. — No tendrán derecho a pensión los deudos citados en el artículo 11:

- a) Cuando tuvieren estado religioso;
- b) La viuda o viudo, divorciado por su culpa en virtud de sentencia emanada de autoridad competente, o separado de hecho sin voluntad de unirse.

Art. 13. — La pensión se concederá a los deudos en el siguiente orden:

- a) A la viuda o viudo en concurrencia con los hijos;
- b) A la viuda o viudo no existiendo hijos;
- c) A los hijos no existiendo viuda o viudo con derecho a pensión;
- d) A los padres del causante si tienen derecho a pensión y cuando no existan viuda, viudo, ni hijos;
- e) A las hermanas del causante si tienen derecho a pensión y cuando no existan viuda, viudo, hijos ni padres.

Art. 14. — La distribución de la pensión se efectuará con arreglo a las disposiciones siguientes:

- a) En caso de concurrencia de viuda o viudo e hijos, corresponderá una mitad a la viuda o viudo, y la otra mitad, se dividirá por partes iguales entre los hijos;
- b) En caso de concurrencia exclusiva de hijos, la pensión íntegra se dividirá entre los mismos, por analogía a lo prescrito en el inciso a);
- c) No existiendo hijos legítimos o naturales reconocidos, o extinguiéndose el derecho de éstos a la pensión, ésta se acumulará íntegramente a la viuda o viudo;
- d) En caso de concurrencia de padres e hijos naturales, la pensión les corresponderá íntegramente por partes iguales;
- e) En caso de concurrencia de hermanas, la pensión les corresponderá íntegramente por partes iguales.

Art. 15. — El derecho a pensión, se extingue en forma irrevocable por fallecimiento y, además:

- a) Para la viuda o viudo con derecho a pensión, el día que contrajere nuevas nupcias;

- b) Para los hijos varones el día que cumplan 18 años de edad, salvo que se encontrasen incapacitados para el trabajo;
- c) Para las hijas solteras, el día que contrajeran matrimonio;
- d) Para los padres, el día que contrajeran nuevas nupcias;
- e) Para las hermanas solteras desde que cumplieran 22 años —salvo que se hallaran incapacitadas— o desde que contrajeran matrimonio;
- f) Para los deudos que se domiciliaren en el extranjero, sin permiso del Poder Ejecutivo;
- g) Por vida deshonesta comprobada en forma, mediante información administrativa;
- h) Por condena del pensionista a la pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta;
- i) Por tomar estado religioso;
- j) Por condena a la pérdida de derecho a ejercicio de la ciudadanía argentina.

Art. 16. — En caso de concurrencia de derechohabientes, si uno de éstos falleciere o perdiere el derecho a pensión, su parte acrecerá la de sus cobeneficiarios.

Art. 17. — En caso de ausencia del causante con presunción del fallecimiento, se otorgará a los deudos pensión provisional, hasta tanto aquélla se declare judicialmente, en cuyo caso la pensión se convertirá en permanente.

Art. 18. — Las pensiones se liquidarán desde la fecha del fallecimiento del causante.

Art. 19. — La pensión es inembargable y no responde por las deudas contraídas por el causante.

Art. 20. — Toda pensión es personal y será nula la cesión o traspaso que por cualquier causa se hiciera.

Art. 21. — La pensión se acordará de conformidad con las siguientes disposiciones y con las limitaciones establecidas en el artículo 22:

- a) A los deudos del personal fallecido en situación de actividad, la mitad del haber de retiro que le hubiere correspondido de haber pasado a retiro el día de su muerte;
- b) A los deudos del personal en situación de retiro, la mitad del sueldo de retiro que gozaba el causante;
- c) A los deudos del personal en situación de actividad, fallecido a consecuencia de un acto del servicio, las dos terceras partes del sueldo que percibía el día de su muerte.

Art. 22. — El monto de la pensión global no podrá ser menor de cien pesos moneda nacional, ni mayor de la mitad del sueldo correspondiente al grado máximo de la escala jerárquica, excepto en el caso del inciso c) del artículo anterior.

Art. 23. — Hasta tanto el Poder Ejecutivo reglamente esta ley y determine el modo de las aportaciones y organismo a las que se efectuarán, el personal del servicio penitenciario de la Nación continuará contribuyendo a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, con los aportes establecidos hasta el presente.

Art. 24. — Los retiros y pensiones que se acuerden a partir de la vigencia de la presente ley, serán atendidos con rentas generales de la Nación y se acordarán por decreto del Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública.

Art. 25. — La Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles ingresará a rentas generales de la Na-

ción, a partir desde la vigencia de esta ley, los aportes o haberes jubilatorios o de pensiones que hubieren correspondido al personal del servicio penitenciario de la Nación, de acuerdo con el régimen de las leyes 11.923, 12.601 y 12.921 (ratificatoria ésta del decreto 35.765/44), y desde el momento que se le acuerde el retiro o pensión.

Art. 26. — La disposición del artículo 3º inciso a) no se aplicará al personal que a la fecha de la sanción de esta ley se encuentre incorporado al servicio penitenciario de la Nación, hasta tanto no compute veinticinco años de antigüedad el comprendido en la plana superior y veintidós años el de la plana inferior. Por esta única vez los agentes penitenciarios que a la fecha indicada tengan 50 o más años de edad, y 25 años de servicios computables en la administración nacional, como mínimo, pasarán automáticamente a disponibilidad y deberá acogerse de inmediato al retiro, con el beneficio del 100 % del promedio que resulte del sueldo de los últimos seis meses y de las otras asignaciones, si correspondieran, previstas en el artículo octavo de esta ley. El Poder Ejecutivo, por disposición expresa, podrá eximir de la obligación que antecede al personal que conceptúe indispensable mantener en servicio.

Art. 27. — Deróganse todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.

Art. 28. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dios guarde al señor presidente.

JUAN HORTENSIO QUILJANO.
Alberto H. Reales.

Sr. Presidente (Cooke). — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Rodríguez (M.). — Señor presidente: el presente despacho a consideración del cuerpo, corrige las disposiciones establecidas por el Honorable Senado en el proyecto de ley relativo a régimen de retiros y pensiones para el personal del servicio penitenciario de la Nación, continuando las normas fijadas en la sanción del sistema de previsión para el personal de la Prefectura General Marítima. La similitud es casi perfecta, con ligeras enmiendas que hacen a la naturaleza específica de cada función, cuya explicación detallada se encuentra en el informe que he suscrito y que acompaña al orden del día 290.

Penetrando en la cuestión que debatimos, haremos resaltar que las necesidades de la especialización, tratándose del ejercicio de la función en la administración pública, llevan paulatinamente al Estado a la incorporación de organismos técnicos para el mejor cumplimiento de sus fines.

En lo que hace a la administración carcelaria puede afirmarse, con verdad, que la trayectoria seguida en materia de organización fué totalmente inconexa y, en muchos casos, librada a la iniciativa individual de quienes accidental-

mente desempeñaban funciones de responsabilidad en los establecimientos carcelarios.

Pero esta falta de coordinación pudo, sin embargo, no significar perjuicio fundamental para el desenvolvimiento de las cárceles y para el tratamiento penitenciario de los reclusos, en base al interés, a la dedicación y al permanente celo del personal que en las cárceles cumplía labores que importaban el cuidado, el aseguramiento y el propósito de reeducar a quienes se hallaban privados de libertad por la comisión de delitos.

A este personal, universalmente, la ley lo ampara con una protección especial, pues se tiene en cuenta el riesgo que importa el desempeño de la misión y la naturaleza misma de los servicios, prolongados de por sí, y frecuentemente recargados por las particularidades propias de establecimientos de organización compleja.

La revolución del 4 de junio ha venido a significar, para el personal carcelario, el logro de legítimas aspiraciones. En lo que hace al régimen de jubilaciones y pensiones, el decreto ley 35.765/44, dió al personal carcelario un estatuto que, si no era perfecto e ideal, era más justo y humano que el que imperaba por leyes anteriores. Es el que actualmente está contenido en el artículo 31 de la ley modificatoria de la que lleva el número 4.349.

Las dependencias comprendidas en el régimen de privilegio, a que hace referencia la disposición legal que antecede, han obtenido o se encuentran en vías de obtener una legislación especial de retiros, jubilaciones y pensiones, en la que también se contemplan los casos de inutilización, indemnizaciones, etcétera, con preceptos que, aunque responden a finalidades más amplias, como son las de previsión, se ha considerado, asimismo, oportuno incluir para posibilitar en el futuro una acción general y orgánica que contemple los riesgos más comunes, y presuntivamente ciertos, a que expone el desempeño de la labor carcelaria.

El personal carcelario, hasta ahora dejado de lado en cuanto carece de un régimen amplio y protector en la medida suficiente, merece el sistema legal que informo. Las disposiciones dictadas por el Poder Ejecutivo, que son de público conocimiento, y las sanciones dadas por el Congreso de la Nación a muchos proyectos de ley que contemplan la realización de una verdadera justicia social, son las que prestan más apoyo a la iniciativa. Es que el factor hombre, cualquiera sea la esfera de su actividad, debe ser tomado en cuenta en forma básica para que, como resultado de su esfuerzo, brinde eficacia por la acción de su interés, de su iniciativa y de su dedicación. Si ello es así en términos generales, es evidente que el estímulo que debe brindarse sea más intenso y particularizado cuanto más delicada, responsable y especiali-

zada sea la labor a desarrollar. El personal carcelario tiene una función, que debe ejercerse permanentemente sobre hombres que se encuentran en condición tal que necesitan atención continuada y que requiere conocimiento fundamental de la especial psicología de los reclusos, para estimular su readaptación al medio social. El empleado del servicio penitenciario de la Nación, para estar en condiciones de afrontar exitosamente su responsabilidad, debe tener la seguridad de que cuenta con un régimen de amparo que importe un estímulo permanente para su actividad. Hasta el presente poco ha podido hacerse para lograr del personal carcelario una acción ampliamente exitosa. Es que en realidad faltó siempre el aliciente para el empleado al servicio de las cárceles y, como consecuencia, dominó la inercia en el sistema penitenciario por razón de aquella circunstancia. Este proyecto de ley pretende, entre otras cosas, vitalizar la organización carcelaria con el estímulo que signifique permanentemente la seguridad de un futuro decoroso en materia económica y la posibilidad voluntaria de poner fin a una actividad en el tiempo en que lo juzgue útil el interesado, luego de un lapso prolongado al servicio de la finalidad de defensa social que entraña la aplicación del régimen carcelario. No es posible dejar librado a su suerte a personal que, hasta hace muy poco tiempo, percibía poco más de 140 pesos mensuales, y que se encontraba sometido, en los territorios inhóspitos de la Patagonia o en el clima tórrido de las gobernaciones del Chaco y Formosa, a un régimen de recargo permanente, sujeto a reglamentaciones estrictas, y expuesto permanentemente al riesgo que importa el trato directo con reclusos que, por razones de constitución psíquica, alteración mental o enfermedades físicas, entraña peligro

continuado para el personal. Es que, como bien se ha dicho, debe reputarse como fundamental la característica del medio donde se desarrollan las tareas —cuya gravitación sobre la capacidad orgánica y anímica incide en forma indudable sobre la personalidad moral del empleado, incluso al extremo de quebrantar su salud aun de hacerle perder la vida en el contacto directo con alienados, semialienados, tuberculosos, específicos y, en fin, delincuentes de toda catadura— donde la acechanza encubierta del constante peligro en potencia fatiga la mente, agobia el espíritu y aniquila la constitución física.

Al presente, más de 4.000 reclusos alojados en las cárceles de la Nación requieren personal idóneo para el logro de la finalidad readaptativa de la pena; 2.400 empleados habrán de trabajar en lo sucesivo con real sentido asistencial, sintiendo la protección del Estado que respalda su presente y su futuro y el de sus familias. Se habrá operado, en suma, por la especialidad, por el estímulo, por la retribución y la protección, un acrecentamiento del interés por una ciencia como es la penitenciaria, que requiere permanentemente personal capaz y práctico para darle contenido realista y hacerla definitivamente eficaz.

Señores diputados: entreguemos nuestro voto favorable al despacho que lleva la firma unánime de los miembros de la Comisión de Asistencia y Previsión Social, como mejor contribución de los poderes públicos de la Nación para el remozamiento y constante superación del sistema carcelario del país. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Sr. Presidente (Cooke). — No habiendo número en la casa, queda levantada la sesión.

—Son las 7 y 55 del día 9 de mayo.